

LA INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO EN LA HISTORIA

Coordinadora Remedios Aranda Rodríguez



ACTAS DEL CONGRESO “INCIDENCIAS DEL LENGUAJE EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS A LO LARGO DE LA HISTORIA” CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE GETAFE, MADRID, LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015

Comité Organizador: Remedios Aranda Rodríguez (UC3M); Federica Pezzoli (UC3M) y M^a del Pilar Pérez Álvarez (UAM).

Comité Científico: Remedios Aranda Rodríguez (UC3M); Lourdes Blanco Pérez-Rubio (UC3M) y María del Pilar Pérez Álvarez (UAM)

Autor/es: ÁLVAREZ ALONSO, Clara/ ARANDA RODRÍGUEZ, Remedios/ BISCOTTI, Bárbara/ DÍAZ ROMERO, M^a Rosario/ GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, María de la O/ HERCE MAZA, José Ignacio/ JUÁREZ TORREJÓN, Angel/ PÉREZ ALVAREZ, M^a. Del Pilar/ SIERRA PÉREZ, María Isabel.

Directora: Aranda Rodríguez, Remedios

Departamento/Instituto: Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Universitario Lucio Anneo Seneca.

ISBN: 978-84-16829-17-0

Fecha de edición: 2017

Palabras clave: Interpretación; negocio jurídico; contratos; lenguaje; Marco Común de Referencia; testamento; propiedad; Derecho Romano; Epikeia; Francisco Suárez.

Versión electrónica disponible en e-Archivo:

<http://hdl.handle.net/10016/24997>

Derechos:



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

INDICE

PRÓLOGO	5
MARÍA DEL PILAR PÉREZ ALVAREZ. INFLUENCIA DEL PRINCIPIO CANÓNICO <i>QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR</i> EN LA DOCTRINA DEL SILENCIO.....	7
BARBARA BISCOTTI. SOPRAVVENIENZE, RISCHIO CONTRATTUALE, <i>LITORA</i> E CONCESSIONI, TRA DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO.	33
CLARA ÁLVAREZ ALONSO. INTERPRETACIÓN Y EQUIDAD: DE LA AEQUITAS MEDIEVAL A LA EPIKEIA ALTOMODERNA.....	79
MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA. “CUANDO LA DESIGNACIÓN DE HEREDERO NO RESULTA CLARA: SUPUESTOS Y REGLAS COMPLEMENTARIAS DE INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIA”.....	110
M^a DEL ROSARIO DÍAZ ROMERO. "LA INTERPRETACIÓN Y LOS EFECTOS DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO”.....	138
ISABEL SIERRA PÉREZ. “LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL”	156
REMEDIOS ARANDA RODRÍGUEZ. LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO EUROPEO.....	170
ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN. LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COMO REGLAS DISTRIBUIDORAS DE LA RESPONSABILIDAD POR LAS DECLARACIONES	190
JOSÉ IGNACIO HERCE MAZA. EL DOCTOR EXIMIUS: ANTIGUAS Y NUEVAS DOCTRINAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS.	202

LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COMO REGLAS DISTRIBUIDORAS DE LA RESPONSABILIDAD POR LAS DECLARACIONES

Ángel Juárez Torrejón⁴¹⁹

Universidad Carlos III de Madrid

La cuestión referida a la interpretación de los contratos, y más ampliamente, de los negocios jurídicos bilaterales, es una cuestión que no puede comprenderse adecuadamente si no es con relación a la mayor o menor importancia que, en una sociedad, se le reconoce a la autonomía privada como mecanismo efectivo de autocomposición de los propios intereses. Si imaginamos un sistema de contratación primitivo, formulario o ritualístico, en el que el pronunciamiento de una fórmula haga surgir el contrato, el problema interpretativo es difícil que surja más allá de la identificación de los elementos esenciales del contrato, porque el propio Legislador no deja espacio al problema interpretativo más allá: el formulismo ritual en el momento generador del contrato, presupone un contenido contractual rígido y predeterminado, y por tanto, la situación que cada parte asume en la relación jurídica creada es, igualmente, prototípica.

La importancia de la función interpretativa de los contratos, crece en relación directamente proporcional al reconocimiento de la libertad, tanto en la generación como en el contenido, del contrato y de la regla contractual que contiene, puesto que la ley ya no monopoliza el contenido de la situación jurídica generada, que ahora ya debe venir, cada vez más, dada por las partes. Por esto es fácil comprender que en un sistema en el que *en cualquier manera que parezca que uno se quiso obligar a otro, valga la obligación, y quede sujeto al cumplimiento de aquello a lo que se obligó*, el problema interpretativo adquiere su máxima importancia: ya no se trata de que alguien quede

⁴¹⁹ ajuarez@der-pr.uc3m.es

contractualmente obligado *cuando* quiera y *con quien* quiera (lo que podríamos llamar autonomía privada *formal*), sino también *como quiera* (autonomía privada *material*)⁴²⁰: lo primero es un problema de *perfección del contrato* y queda fuera del tema que ahora nos interesa; lo segundo es un problema de *contenido* del contrato, y es el objeto sobre el que típicamente se proyecta la función interpretativa de los contratos.

Las ideas expuestas brevemente hasta aquí, permiten asentar, como punto de arranque para las ideas que se exponen en esta comunicación, que la interpretación del contrato desarrolla un papel esencial en la determinación del contenido contractual, y por tanto, en la definición de la posición jurídica de las partes en la relación creada. El contrato es un mecanismo de contacto social, y más en concreto, de puesta en común de unos intereses, en el que los contratantes asumen un papel de *satisfactores* de los mismos más o menos intenso según el caso. En este sentido, el contrato es un mecanismo de distribución, entre las partes contratantes, del riesgo de satisfacción de los intereses comprendidos en lo que podríamos llamar “órbita de protección” o “fin de protección” del contrato. Visto desde el otro lado, el contrato es un mecanismo distribuidor de una responsabilidad libremente asumida respecto de la satisfacción de unos intereses cubiertos por el contrato.

La determinación de tales intereses cubiertos, el señalamiento de lo que desde la regla contractual se entiende como una conducta adecuada y satisfactoria de lo que podía legítimamente exigirse del que la realiza, nos lo indica, *ante todo*, el resultado de la labor interpretativa⁴²¹.

Las reglas de los artículos 1281 a 1289 CCiv como reglas de responsabilidad en la determinación del contenido contractual

El bloque normativo constituido por los artículos 1281 a 1289 CCiv (Capítulo IV, Título II, Libro IV del Código Civil), recoge una serie de normas cuya presencia y

⁴²⁰ GARCÍA GOYENA, al comenzar el comentario a la primera de las disposiciones destinadas en el Proyecto de Código de 1851 a la interpretación (art. 1019), comienza diciendo que “la voluntad de las partes es la ley de los contratos” (*Concordancias*, III, 54). En una línea de arranque distinta, pero directamente relacionada con la idea expuesta, GÓMEZ DE LA SERNA y MONTALBÁN comienzan explicando la materia de interpretación de los contratos como una institución que tiene por hipótesis que “están mal concebidas las convenciones”, para lo que es conveniente “fijar algunas reglas para interpretarlas” (*Elementos del Derecho Civil y Penal de España*, II, 1872, 202).

⁴²¹ Y creo que debe decirse “ante todo”, porque además de interpretar el contrato, posiblemente haya también que *integrarlo*. Sin embargo, lógicamente la labor integradora del contrato, es posterior a la labor interpretativa, porque sólo después del resultado que arroje dicha labor interpretativa son detectables los vacíos contractuales que habrá que *integrar*.

vigencia debe ser considerada *a priori* por los contratantes, por cuanto que son reglas atributivas de sentido de las expresiones por ellos utilizadas en la confección del contenido de la regla contractual. Son normas establecidas por el Legislador para dotar, en los casos problemáticos, de un determinado sentido a las expresiones empleadas por todo contratante, independientemente del tipo contractual de que se trate⁴²², y por tanto, atributivos de autorresponsabilidad, para el que los emplea, en relación al sentido que legítimamente (jurídicamente) cabe esperar de ellas por parte del otro contratante. Esto introduce en el debate dos ideas que me parecen fundamentales en sede de interpretación de los contratos, y que se suele dejar de lado en la explicación de la materia en nuestros manuales, aunque han sido suficientemente desarrolladas en el ámbito del *Common Law*: 1) la idea de que *sólo* hay *una* interpretación *legítimamente* (jurídicamente) correcta; y 2) la *previsibilidad* del resultado interpretativo (con la consiguiente implícita asunción de dicho resultado cuando se contrata en los términos en que se hace).

Esto permite además apuntar alguna idea sobre la naturaleza, imperativa o dispositiva, de las normas legales de interpretación. Creo que puede razonablemente concluirse en el carácter *imperativo* de estas normas (arts. 1281-1289 CCiv). Pero carácter *imperativo*, en el bien entendido que ello no significa que el declarante no controle el supuesto de hecho determinante de la aplicación de la regla interpretativa: la aplicación de la regla interpretativa supone la asunción por parte de aquel del que proviene, del sentido que haya que dar a los términos empleados *ex arts.* 1281-1289, y en este sentido es una regla que, por ser interpretativa, es una regla atributiva de autorresponsabilidad del sentido de su declaración. En este sentido, es absolutamente imposible que un contratante pueda escapar de la aplicación del bloque normativo que suponen los mencionados preceptos; pero lo que sí puede es configurar el supuesto de hecho que implica su declaración para evitar la aplicación de una norma interpretativa concreta; pero esto le hará, forzosa y necesariamente, caer en el supuesto de hecho de *otra* regla interpretativa de las allí previstas.

Por ejemplo: si un contratante, antes del momento de perfección del contrato, se preocupa de forma expresa de evitar que un determinado concepto

⁴²² A lo sumo, el art. 1289 diferencia criterios interpretativos según el contrato sea oneroso o gratuito, pero nada más.

sea empleado en el sentido que cabría atribuirle *ex art.* 1282 o conforme al 1285, el contratante que así actúa *salva* su autorresponsabilidad por el sentido que, de otro modo, se le atribuiría a la expresión salvada; pero esto le hace entrar en el supuesto del art. 1281 CCiv, como norma también atributiva de autorresponsabilidad del sentido de los términos empleados.

A) Sólo hay una interpretación legítimamente esperable (jurídicamente correcta)

Las reglas interpretativas de los artículos 1281 y ss CCiv conducen a *un resultado*: el resultado *querido por el Legislador*, y por tanto, de todas las interpretaciones lingüísticamente posibles, la única jurídicamente atendible.

Que las reglas jurídicas de interpretación de los contratos son plasmación de un previo juicio valorativo realizado por el Legislador, y resultado de una ponderación de intereses y de lo que cree adecuado, es algo difícil de negar, aunque hay que reconocer que ello resulte menos obvio que en relación con el problema de la *interpretación de las normas*. La razón de su menor evidencia, es que las normas tienen por destinatario a la sociedad, y por tanto la interpretación que se dé a una norma tiene una trascendencia, igualmente, social. Sin embargo, la interpretación que se haga de los términos de un contrato no tiene esa trascendencia social, porque el contrato es *lex privata* entre sólo los contratantes⁴²³. Ahora bien: las normas jurídicas que se articulan para *interpretar cualquier contrato* sí son normas dirigidas a la sociedad, y consecuentemente el Legislador tiene herramientas para dirigir, en la generalidad de los casos, a unos determinados intereses o principios, el resultado interpretativo en abstracto de los contratos celebrados en una sociedad⁴²⁴.

⁴²³ Como ha señalado LÓPEZ Y LÓPEZ, “la interpretación de la norma es la de un principio jurídico abstracto; la interpretación del contrato es la de un supuesto de hecho y sus consecuencias jurídicas, es decir, la interpretación de algo concreto”. Comentario a los artículos 1281 y 1282 /en/ CAÑIZARES LASO; PABLO CONTRERAS; ORDUÑA MORENO; VALPUESTA FERNÁNDEZ (dirs.). *Código Civil comentado*. Vol. III, 2011, 692.

⁴²⁴ Como ya señaló Riccardo ORESTANO en relación a la función de interpretación de las normas, “bajo el engañoso manto de una cada vez más articulada y refinada “técnica” interpretativa, es este [el de la interpretación normativa] uno de los campos en los que anidan las más osadas y, a veces alarmantes operaciones ideológicas”. Y añade a continuación: “Y éstas son tanto más insidiosas cuando más se hace ostentación de hacer derivar las soluciones propuestas de postulados “lógicos”, que tendrán que imponerse por la fuerza irresistible de la evidencia”. Concluye: “también en este campo, como en tantos

Esta idea consistente en que sólo hay *una* única interpretación *legítimamente (jurídicamente) correcta*, no es algo, ni mucho menos, obvio, y exige algún apunte.

La idea mencionada, a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, ha sido desarrollada y goza de predicamento en el ámbito del *Common Law*. Como ha señalado LEWISON, “although a contract may potentially have more than one possible meaning, the court can select only one meaning (...). The meaning of the contract, once interpreted, does not change”⁴²⁵. Y recogiendo la postura sostenida por Lord Diplock en el caso *Slim v Daily Telegraph Ltd* (1968): “Words are the tools of [the trades]. [A person] uses them to define legal rights and duties. They do not achieve that purpose unless there can be attributed to them a single meaning as a “right” meaning. And so the argument between lawyers starts with the unexpressed major premise than any particular combination of words has one meaning, which is not necessarily the same as that intended by him who published them or understood by any of those who read them, but is capable of ascertainment as being the “right” meaning by the adjudicator to whom the law confides the responsibility of determining it”⁴²⁶. Esta idea vertebral de la función interpretativa es lo que ha permitido a la doctrina concluir que la finalidad de la misma sea conseguir un *objective approach* de la interpretación contractual, esto es, lo que una persona razonable⁴²⁷ hubiera interpretado⁴²⁸.

otros, existen nexos estrechísimos entre cada una de las situaciones históricas en su dinámica, las razones concretas que impulsan a trabajar en una dirección mejor que en otra y las ideológicas que se quieren acreditar como “pura” teoría”. Véase ORESTANO, Riccardo. *Introducción al estudio del Derecho Romano* (traducción y notas de Manuel Abellán Velasco). Madrid: Universidad Carlos III de Madrid – Boletín Oficial del Estado, 1997, 72.

⁴²⁵ LEWISON, Sir Kim. *The interpretation of contracts*. London: Sweet & Maxwell, 2007, 29.

⁴²⁶ *Loc. cit.*

⁴²⁷ TREITEL, *The law of the contract*. London: Sweet & Maxwell, 2011, 208.

“The inquiry is objective: the question is what a reasonable persona, circumstanced as the actual parties were, would have understood the parties to have meant by the use of specific language. The answer to that question is to be gathered from the text under consideration and its relevant contextual scene” (Caso *Sirius International Insurance Co v. FAI General Insurance Ltd*, 2004. Lord Steyn). Extraído de LEWISON, *op. cit.*, 24.

⁴²⁸ La idea del “hipotético tercero” en la concepción de la función interpretativa no es, sin embargo, desconocido en el ámbito de nuestra tradición jurídica. CARNELUTTI ya se expresaba en estos términos: “la insuficiencia del concepto de interpretación como entendimiento (...) encuentra confirmación en las experiencias más comunes de la interpretación: tanto en sus formas más humildes, como en la del traductor, como en las más altas, como son el intérprete didáctico, dramático o musical, el intérprete es siempre uno que se interpone entre quien manifiesta el pensamiento y quien se lo debe apropiar para facilitar a este último la apropiación, y, a tal fin, no se limita a tratar de comprender sino que trata de hacer comprender aquello que ha comprendido; por tanto, el concepto de la interpretación, más bien que sobre una pareja debe apoyarse sobre un trío, del cual el intérprete constituye precisamente el término medio” (Véase su obra *Derecho y proceso*. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América, 1971, 164).

También en la doctrina italiana, la idea de que la finalidad de la interpretación contractual consiste en dar un sentido *objetivo* a las declaraciones contractuales (lo que en el *Common Law* hemos visto que se designa con el término “objective approach”) ha sido planteada, creo que certeramente, por Luigi FERRI, sin que el hecho de que de *lege lata* el artículo 1362 del Codice Civile (equivalente a nuestro artículo 1281 CCiv) prevea que en la interpretación debe llevar a esclarecer la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, haya impedido una conclusión tal. En efecto, FERRI apunta que es *la ley* la que nos indica el camino a seguir para hallar tal voluntad común de los contratantes. Y afirma: “la común intención [*ex art. 1362 Codice Civile* –equivalente a nuestro art. 1281-], al significar un punto de encuentro o combinación de dos voluntades distintas, no coincide necesariamente ni con una ni con otra, ni con la suma de ambas, sino con algo que está fuera de cada una de ellas. En definitiva, el encuentro no puede ocurrir más que en el exterior de ambos sujetos y, por consiguiente, en un plano objetivo”⁴²⁹. Y concluye más adelante: “la unidad de la voluntad contractual (...) es para nosotros total, absoluta, precisamente porque no es voluntad de sujetos sino voluntad normativa. En otras palabras, voluntad contractual son, para nosotros, las normas establecidas por medio del contrato”⁴³⁰. De aquí, a la concepción de las reglas de interpretación contractual como normas de distribución del riesgo del sentido de la declaración, hay un paso; y lo dio CARNELUTTI, cuando afirmó que “se atribuye a la declaración, en todo caso, no el contenido que en realidad el autor haya querido o el destinatario haya sabido dar, sino aquel que, según las reglas del lenguaje, uno y otro *le deben dar*. Se comprende, por tanto, que el riesgo de una transmisión equivocada del pensamiento sea distribuida justamente y que lo soporte aquella de las partes que no ha procedido de acuerdo con las reglas de la experiencia, es decir, que no ha hablado o que no ha interpretado con propiedad”⁴³¹.

Indirectamente, esto conduce a interesantes conclusiones sobre las que ahora no procede más que dejar indicado. Como el mismo FERRI apunta en coherencia con la tesis sostenida, “[a]cuerdo no significa, pues, concordancia o coincidencia de dos voluntades reales, sino convergencia y fusión de dos

⁴²⁹ FERRI, Luigi. *La autonomía privada*. Traducción y notas de Derecho español por Luis Sancho Mendizábal. Granada: Comares, 2001, 152.

⁴³⁰ *Op. cit.*, 155.

⁴³¹ CARNELUTTI, Francesco. *Teoría general del derecho*. Traducción de Carlos G. Posada. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1941, 306.

manifestaciones. Se explica así como el contrato puede subsistir sin la concordancia de las voluntades reales”⁴³². De este modo se acentúa la idea de declaración “contractual” como conducta (auto)responsable, en la que el sentido que le corresponda está íntimamente relacionado con una idea de seguridad jurídica y de legítima expectativa, que hay que proteger en cabeza del receptor de la misma⁴³³.

La idea me parece defendible en nuestro ámbito. Además, como se mencionará más abajo, introduce seguridad y previsibilidad a los contratantes. Pero aun así, todavía necesita de más aclaraciones. Para ello, me parece esencial volver al punto de partida: las reglas sobre interpretación de los contratos, contenidas en los artículos 1281 y ss. “[n]o son apotegmas lógicos; por el contrario, suponen criterios de política jurídica, deciden imperativamente casos de duda y ordenan cómo se ha de completar lo establecido en la regla negocial”⁴³⁴. Lo acertado de esta regla parece claro, y ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones⁴³⁵.

Si se comparte esta tesis (y creo que no ofrece muchas dudas en su acierto), lo que ya no se entiende muy bien es el tradicional criterio jurisprudencial a la hora de diferenciar, dentro de la labor de interpretación del contrato, las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. LÓPEZ Y LÓPEZ, condensando las ideas que pueden extraerse de la doctrina jurisprudencial, concluye que la interpretación del contrato presupone una primera etapa de cuestiones *de hecho*, y una posterior de cuestiones *de derecho*. Y dentro de la primera, el citado autor entiende que “se puede desdoblar en una primera fase de establecimiento de los datos, o fijación previa de cuáles sean los hechos que se han de interpretar, y una segunda de averiguación del sentido negocial de los datos, que es la tarea propiamente interpretativa. Objeto inmediato y fundamental de la cuestión de hecho será determinar el propósito de la conducta de los contratantes, y a su lado surgirán las indagaciones relativas al contenido dado a la regla contractual (...)”⁴³⁶.

⁴³² *Op. cit.*, 154.

⁴³³ En el fondo, late el mismo problema que subyace en el tratamiento del valor negocial de la declaración hecha con “reserva mental”. La solución más razonable a este problema, es enfocarlo desde el punto de vista de la confianza despertada en su receptor atendidas las circunstancias del caso; de otro modo, la figura de la reserva mental sería una ventana abierta para el desdecirse de una declaración contractual.

⁴³⁴ DE CASTRO, Federico. *El negocio jurídico*, 1971, 80.

⁴³⁵ De forma reciente, véase la STS de 2-VII-2015 (núm. 405/2015).

⁴³⁶ *Op. & loc. cit.* No obstante, véase lo que se expone más abajo.

Como no podría ser de otro modo, las reglas jurídicas de interpretación contenidas en los artículos 1281 y ss CCiv, son lo suficientemente amplias y abstractas como para pretender ser aplicadas a cualquier hipótesis de relación contractual. Estas reglas, como reglas de atribución de sentido, efectivamente conducirán a la *única* interpretación legítimamente deseable (esperable) por el Derecho atendido el caso concreto, esto es, la única interpretación jurídicamente deseable para *esa*, y no otra, relación contractual. Esto implica un proceso necesario de aplicación del Derecho (aplicación de las reglas jurídicas de interpretación al objeto de la interpretación: el contenido contractual), y como tal proceso aplicador (intelectual) del Derecho para la resolución de un conflicto, está condicionado por la valoración subjetiva y el criterio del *concreto* aplicador del Derecho *in casu*. Por eso, no hay que confundir, por un lado, que sólo haya *una* interpretación legítima para el Derecho en cuanto las normas jurídicas de interpretación son manifestación de un criterio de política legislativa, y por otro lado, que no sea teóricamente posible llegar a, por ejemplo, dos conclusiones interpretativas diferentes para un mismo caso, aun aplicando las mismas reglas jurídicas de interpretación (arts. 1281 y ss.), sencillamente porque los intérpretes son, también, dos personas distintas.

La labor de interpretación de un contrato es siempre una labor jurídica, y por tanto, juzgable en términos jurídicos. Este es el verdadero sentido de la línea jurisprudencial, ampliamente consolidada, que niega la posibilidad de revisar en casación la interpretación contractual dada en las instancias anteriores “siempre que las normas jurídicas de interpretación hayan sido respetadas”, o que la interpretación resulte manifiestamente “ilógica o absurda”.

¿Conduce esto a la necesidad de acudir a la diferenciación entre cuestiones de hecho / cuestiones de derecho, en orden a delimitar en materia de interpretación contractual, el ámbito del que puede conocer el Tribunal Supremo en un recurso de casación? En mi opinión no. Nótese que la cuestión, planteada en términos de cuestión de hecho / de derecho encierra una contradicción: la revisión en casación de la interpretación dada en las instancias inferiores no es posible, siempre que sea el resultado de aplicar las reglas jurídicas (ineludibles) de interpretación o no resulte ilógica ni absurda; luego necesariamente, para *descartar* la revisión en casación de una interpretación dada, es necesario que el Tribunal Supremo juzgue la *juridicidad* de dicha interpretación, es decir, que se ajusta a Derecho: si la juzga *adecuada* a los criterios legales de interpretación, la da por buena y *se abstiene* de entrar más allá en la

materia, entendiendo que entrar en ello desborda la finalidad del recurso de casación⁴³⁷; *en otro caso*, interpretará aplicando las reglas de los artículos 1281 y ss. CCiv, y *revocará* la interpretación asumida en la instancia inferior⁴³⁸. Obsérvese que, si se da lo primero, con arreglo a la doctrina que aquí se cuestiona se entendería que se trata de una cuestión *de hecho* que excede de la órbita del recurso de casación; pero si entiende que se da lo segundo, la cuestión pasa a ser una cuestión *jurídica* (y no meramente de hecho), y por tanto *entra* en la órbita material de un recurso de casación para *casar* la interpretación dada por buena en la instancia inferior^{439 y 440}.

La que para mí es la única y verdadera razón de la anterior doctrina del Tribunal Supremo, no es tanto que se trate de una cuestión, en unos casos, de hecho y en otros casos jurídica: *que en unos casos se entienda jurídicamente correcta una interpretación y en otros no, cambiará el sentido de la decisión del Tribunal Supremo, pero no puede afectar a la naturaleza intrínseca (jurídica/de hecho) de la cuestión como tal*⁴⁴¹. El empleo de tales calificaciones de las cuestiones (como de hecho o como jurídica)

⁴³⁷ “Queda fuera del ámbito del recurso cualquier revisión del resultado de la investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad de los contratantes que resulte respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea el único admisible conforme a ellos (...), porque tal tipo de conclusión excedería del ámbito propio de este recurso extraordinario (...)” (STS 4-II-2015 (núm. 14/2015); STS de 22-VI-2011 (445/2011)).

⁴³⁸ Como sucedió en el caso tratado en la STS 2-VII-2015 (núm. 405/2015).

⁴³⁹ La cuestión creo que se ve clara si se lee la STS de 21-X-2011 (696/2011), en la parte que se transcribe a continuación: “la interpretación de los contratos es una facultad propia de los tribunales de instancia, que ha de ser mantenida en casación salvo que resulte ilógica o absurda, o viole directamente una norma jurídica que impusiera determinada interpretación, pues no se trata de obtener mediante el recurso de casación –que no es una tercera instancia– un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles (...) sino corregir aquélla que constituya una clara vulneración del ordenamiento jurídico”.

⁴⁴⁰ La contradicción apuntada alcanza su máxima expresión en la STS de 2-IV-2002 (284/2002). Se transcribe a continuación, por ser muy ilustrativo, el siguiente fragmento de la misma: “la interpretación contractual se desdobl[a] en dos partes: la fijación de los hechos –«questio facti»–, y la aplicación de las normas valorativas o interpretativas –«questio iuris»–.

Pues bien, en la sentencia recurrida se ha fijado de una manera lógica y racional que el contrato que suscribieron las partes el 25 de enero de 1992, es un efectivo contrato de compraventa y no uno de opción de compra; deducción que se basa en unos datos concretos, como son la entrega en el acto por el vendedor de unos determinados bienes inmuebles en los que ha realizado determinadas obras, a cambio de recibir como precio aplazado un efecto por trece millones de pesetas que resulta impagado. Todo ello a pesar de una posible literalidad del contrato por nominarlo como opción de compra.

Con todos estos datos –objeto y precio– que hay que respetar como elementos de la soberanía de la instancia, no hay más remedio que calificar, ahora, como un verdadero contrato de compraventa, el aludido con anterioridad, ya que se dan los requisitos esenciales para ello”.

⁴⁴¹ En efecto, el mismo LÓPEZ Y LÓPEZ, *op. cit.*, reconoce que en la postura jurisprudencial que es comúnmente defendida, “hay muchas veces un camino de ida y vuelta estrechísimo porque en bastantes ocasiones para dilucidar el absurdo, la arbitrariedad, la ilógica y hasta la plausibilidad hay que denunciar en casación la infracción de las normas de interpretación. La postura del Tribunal Supremo es poco clara (y tal vez no pueda serlo) sobre el límite entre cuestión de hecho y cuestión de derecho, viéndose que se atiende (y tampoco es serio motivo de crítica) a la justicia material, por mucho que eso sea impropio de la casación” (p. 693). En mi opinión, la idea planteada aquí por el citado autor debe compartirse.

responde más bien a una idea *meramente práctica*, cual es la inmediatez del juez, en primera y segunda instancia, respecto a las fuentes probatorias; inmediatez de la que *carece* el Tribunal Supremo cuando conoce en casación. O expresado de otra forma: el juez de primera instancia, o el tribunal de apelación, siempre podrán formarse una mejor idea de la interpretación jurídicamente adecuada al caso concreto, porque han tenido la posibilidad de conocer de forma inmediata los elementos fácticos relevantes para llegar a esa conclusión, conforme a la actividad probatoria desplegada por las partes. Por ello se permite que, *incluso aunque se trate de una cuestión distinta a la violación de los artículos 1280 y ss.*, sí quepa *casar* la sentencia inferior, pero con la condición de que la interpretación dada sea flagrantemente “ilógica o absurda”, que es lo mismo que decir en términos prácticos, cuando *a pesar de la inmediatez en el acceso a las fuentes probatorias* no se puede tener por correcto que ello sea una interpretación legítimamente esperable⁴⁴². Pero la única cuestión *verdaderamente de hecho* que se da en materia probatoria, consiste en la prueba material de los hechos sobre los que va a proyectarse la labor interpretativa como proceso jurídico, nada más.

Por otra parte, y para concluir en este subapartado, no debe confundirse el carácter objetivo de la naturaleza de función interpretativa como proceso jurídico, con la clásica bipartición de las normas interpretativas en normas de interpretación objetiva y normas de interpretación subjetiva⁴⁴³. Incluso en las llamadas normas de interpretación subjetiva (como sucede con la del art. 1281 CCiv), la interpretación dada a los términos de un contrato como resultado del proceso interpretativo-jurídico, se apoyan implícitamente en un elemento de *probabilidad* de lo que realmente se quiso decir en el momento de celebración del contrato. Sólo hay que pensar que la aplicación de las reglas jurídicas de interpretación de los contratos están previstas para las hipótesis de conflicto entre los contratantes sobre el sentido de los términos empleados; términos que cada una de las partes ha empleado-aceptado en cuanto ha entendido en ese momento que reflejan adecuadamente su intención (pues de otra forma, no las hubiera empleado-las hubiera rechazado). Es decir: los términos empleados en la contratación son el punto de partida de cualquier investigación que pretenda indagar en la *verdadera*

⁴⁴² *Vid.* parte transcrita de la STS de 21-X-2011 (676/2011).

⁴⁴³ En palabras de DÍEZ-PICAZO, hablamos de interpretación objetiva cuando se “trata de eliminar las dudas y ambigüedades de la declaración contractual atribuyendo a la misma un sentido y un significado obtenido a través de criterios objetivos, con independencia de lo que los declarantes pudieran querer”. Hablamos de interpretación subjetiva “cuando se dirige a averiguar o a buscar la voluntad o intención común de los contratantes”. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, I, *Introducción. Teoría del contrato*. Madrid: Civitas, 2007, 496-497.

intención de los contratantes, en cuanto que se entiende que su empleo es reflejo de aquella intención. Y en este punto el intérprete se mueve en términos de *probabilidad*, por mucho que ésta sea elevada, en cuanto que le resulta *imposible* tener la certeza *absoluta* de la verdadera intención del contratante en cuestión más allá de entender que lo *razonable* (y por ello, el Legislador lo convierte en *legítimo*) es que los términos empleados reflejan la voluntad de su emisor. Por ello, incluso aquellas disposiciones respecto de las que la doctrina ofrece pocas dudas a la hora de calificarlas como normas de interpretación *subjetiva*, son herramientas enmarcadas en un proceso jurídico cuyo resultado en cierta medida es independiente de la *verdadera* intención, en términos de *absoluta seguridad*, de los contratantes. De ahí que, como se ha adelantado, haya que establecer la diferencia entre el carácter objetivo de la naturaleza de función interpretativa como proceso jurídico, y las llamadas normas de interpretación objetiva como contrapunto a las normas de interpretación subjetiva.

B) La previsibilidad del resultado interpretativo

Como consecuencia de la idea explicada en el apartado anterior, con mayores o menores dificultades, la interpretación que haya que darle a los términos contractuales es un resultado previsible *a priori* durante la fase de negociación y formación del contrato, y por tanto, por el solo hecho de contratar en los términos en que se hace, implica que las partes asumen (se autorresponsabilizan de) ese resultado interpretativo, que es lo mismo que decir, de ese contenido contractual.

En este sentido, de nuevo la doctrina jurisprudencial en el ámbito del *Common Law* servirá para ilustrar este aspecto: “The objective interpretation is of paramount importance in commercial affairs; commercial men have frequently to take important decisions with some speed, and it is of great importance that they all know that they can rely on Courts and arbitrators, if any dispute should later arise, to adopt the same objective approach as the themselves have to adopt in the daily administration of their contracts”⁴⁴⁴.

La idea ya había sido intuita por CARNELUTTI cuando afirmó que “declarante e intérprete han de ser dos jugadores perfectos, en forma que uno y otro conozca y sepa

⁴⁴⁴ Caso *President of India v Jebsens (UK) Ltd*, 2005, Lord Goff of Chieveley. Extraído de LEWISON, Sir Kim. *The interpretation of contracts*, op. cit., 25.

aplicar la regla del juego. Se necesita la unidad de método entre ambos. Tienen que hacer, aun cuando en sentido inverso, el mismo camino”.